E. P. Thompson y *La formación de la clase obrera en Inglaterra:* algunas claves para leer el presente

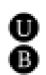
Joan Quesada•

En un artículo reciente, el sociólogo francés Michel Wieviorka calificaba el momento por el que actualmente atraviesa la Europa occidental como una «fase histórica marcada por la falta de puntos de referencia y la descomposición del vínculo social» (Wieviorka, 2014: 17). Aludía con ello a la desintegración de las estructuras sociales (e ideológicas) que habían definido la mayor parte del siglo XX, así como al aparente abocamiento a «un individualismo que reduce al cinismo de los más dotados, a la injusticia, a las lógicas de resentimiento y de odio». Ante tal situación, proseguía Wieviorka, son fundamentalmente dos las propuestas que hoy en día pretenden «reconstruir directamente el cuerpo social y, por lo tanto, el vínculo social». La primera la representan los movimientos nacionalistas de carácter emancipador (en Catalunya o en Escocia, por ejemplo), que pretenden aglutinar a sus poblaciones diversas en torno a un proyecto que, a fin de cuentas, a lo que aspira es a la construcción conjunta de una nueva justicia social. La otra respuesta a la presente crisis social es la que preconiza el embridamiento de la economía neoliberal y la restauración plena de las deterioradas políticas redistributivas como medio para recuperar el vínculo cívico y la cohesión de la sociedad.

Se nos advierte, sin embargo, que ninguna de ambas vías ofrece demasiadas garantías de éxito, porque ambas ignoran un hecho esencial: que la pérdida del vínculo social se corresponde con «la pérdida de la división conflictiva de la sociedad tal como se había institucionalizado a finales del siglo pasado».

> Recordémoslo: no hace tanto tiempo, las sociedades, en Europa occidental, se caracterizaban ante todo por lo que las dividía, por el conflicto estructural que enfrentaba al movimiento obrero con los amos del trabajo. Este conflicto daba cuerpo a la vida política, pero también intelectual, y se organizaba en torno a una visión compartida por todos los protagonistas (…) Presentaba aspectos de violencia pero, en mayor medida, de institucionalización y, a menudo, de negociación.
>
> Este conflicto, en lo que pueda tener de dimensión estructural, queda detrás de nosotros en el tiempo. Y es, tal vez, lo que más nos falta: una oposición

• Joan Quesada es miembro estable del Observatorio del Conflicto Social. Ha sido editor adjunto de *Adbusters en español,* y miembro del grupo de redacción de *Monthly Review. Selecciones en castellano.* Actualmente es coeditor de la edición en español de *Monthly Review.*



entre protagonistas que comparten los mismos valores y pretenden, cada uno por su cuenta, tomar sobre sus hombros la responsabilidad de dirigir una vida colectiva totalmente tensada hacia el futuro (Wieviorka, 2014: 17).

El artículo concluye sosteniendo que el vínculo social solo se restaurará cuando (y si) algunas de las actuales luchas y protestas —en particular, aquellas que ya no miran exclusivamente hacia el pasado, hacia viejos modelos industriales corporativistas, sino hacia nuevos horizontes de democracia, dignidad y derechos humanos— alumbren «nuevas concepciones del vivir juntos y nuevas solidaridades activas».

Si Wieviorka está en lo cierto —y nosotros así lo creemos—, entonces la obra magna del historiador inglés E. P. Thompson, su monumental *La formación de clase obrera en Inglaterra,* es hoy más relevante que nunca como ejemplo histórico precisamente de ese tipo de transformación social, económica e institucional que desemboca en el surgimiento de una nueva gran divisoria conflictual en torno a la cual se reorganizan la vida y las solidaridades sociales. Pues *La formación de la clase obrera en Inglaterra* no es sino una descripción pormenorizada de los procesos que dieron lugar al nacimiento de una conciencia de clase entre los trabajadores ingleses, entendida dicha conciencia como el reconocimiento de su comunidad de experiencias y su identidad de intereses (opuestos a los intereses y las experiencias de aristócratas, patronos y clases medias) y plasmada en una pléyade de organizaciones e instituciones propias. Y aunque no es el objeto específico de la obra, la formación paralela en esos mismos procesos de una clase propietaria capitalista queda igualmente bien descrita en ella.

En el presente escrito, nos proponemos establecer una somera comparación entre, por un lado, aquel macroepisodio de cambio social que tuvo lugar en el periodo de 1790-1832 en Inglaterra y que dio como resultado la implantación allí de la nueva sociedad de clases y, por otra parte, los procesos actualmente en curso en, al menos, la Europa occidental, cuyo resultado es aún hoy incierto. El objetivo último que perseguimos es apuntar algunas similitudes (y también diferencias) entre ambos procesos que tal vez nos resulten útiles para la lectura de nuestro propio momento histórico.

Para ello, nuestro proceder será el siguiente. En primer lugar, a partir de la obra de Thompson, intentaremos aislar y describir cuáles fueron los principales ingredientes presentes en la transformación social de Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX. Posteriormente, estos nos servirán no solo para señalar si existen elementos de coincidencia entre el momento actual y aquel, sino también para determinar hasta qué punto hoy nos hallamos o no, históricamente, en una fase de cambio social acelerado entre etapas de relativa estabilidad estructural o cambio social más lento.

1. Ingredientes de la transformación social de la Revolución industrial

Como bien indica Thompson en el Prefacio a *La formación de la clase obrera,* las formaciones sociales son productos históricos siempre provisionales en un proceso fluido que «elude el análisis si intentamos detenerlo en seco en un determinado momento y analizar su estructura» (Thompson, 2012: 27). Así pues, las transformaciones experimentadas por la sociedad inglesa a lo largo de la primera mitad del siglo XIX son difíciles de comprender sin hacer referencia también a los cambios acaecidos durante el siglo precedente. Aun así, podemos afirmar que en 1790 Inglaterra, en el plano político, es una monarquía parlamentaria bicameral que cuenta con un sistema electoral de sufragio fuertemente restringido a la aristocracia y la gran burguesía; un sistema instituido de peticiones populares e iniciativas legislativas, y un articulado legal que regula aún aspectos tan fundamentales de la vida ordinaria de los ciudadanos como son el precio de los productos básicos (principalmente, el pan) y la entrada y el ascenso en los diferentes oficios, siguiendo en ello las pautas «paternalistas» propias del Antiguo Régimen.

Mientras tanto, en 1790, en el terreno de la producción de bienes, la gradual implantación del sistema fabril convive con la producción tradicional —y todavía mayoritaria— en los talleres artesanos de las ciudades y en los hogares particulares del campo como actividad complementaria al cultivo de la tierra. En cuanto a la agricultura, en esos momentos el proceso de cercado de tierras entra en su fase definitiva para provocar, entre 1760 y 1832, la práctica desaparición de los terrenos comunales. Por último, en el ámbito del comercio, la expansión de las ideas de Adam Smith está dando lugar a una progresiva penetración de la ley de la oferta y la demanda en la determinación de los precios tanto de los bienes de consumo e intermedios como del trabajo. Sobre ese sustrato general de cambio económico se produjeron las transformaciones en los marcos de interpretación, las reivindicaciones, la organización, las instituciones, los repertorios de protesta y los objetos de las protestas de los trabajadores que marcarán el nacimiento de la clase obrera inglesa, así como de su contrapartida, las clases propietarias. El proceso, no cabe decirlo, es particular de un Estado, y no obstante, creemos que en él se pueden apreciar igualmente algunos elementos más universales que nos pueden ayudar a comprender otros grandes procesos de cambio social también en un plano supraestatal.

Así pues, en el año 1790, bajo la inspiración inicial de la Revolución Francesa, dio comienzo en Inglaterra un largo ciclo de conflicto sostenido que, con algunos paréntesis, condujo en 1832 a la Reforma parlamentaria que estableció el límite preciso entre las clases incluidas en el sistema político (o con derecho a voto) y la clase excluida de él, un límite que se correspondía fielmente con la distinción socialmente estructuradora entre clases medias y propietarias, por un lado, y la clase obrera, por otro. En ese periodo, además, las antiguas rebeliones

dispersas de las muchedumbres acabaron transformadas en movilizaciones de clase. Entre los ingredientes de esa transformación destacaremos: (1) el surgimiento de un marco de interpretación compartido por los trabajadores de los distintos oficios y los agricultores, anteriormente desconectados entre sí, impulsado por un sentimiento común de agravio moral; (2) la formación de organizaciones de clase y de ámbito nacional; (3) la conjunción de las reivindicaciones políticas con las demandas laborales y, más en general, el nacimiento de una visión alternativa de la organización de la sociedad. En definitiva, y como ya hemos adelantado, el resultado fue el surgimiento de una identidad común y un marco de unidad de acción entre hombres y mujeres que anteriormente no eran conscientes de la pertenencia a una misma categoría social. Lo más importante para nosotros, sin embargo, es que esa nueva identidad no fue sino el producto de un proceso fluido de intensa movilización y conflicto social que, en su desarrollo, sacudió las fidelidades tradicionales y dio pie a nuevos alineamientos sociales que transformaron la estructura de la sociedad. A continuación, abordaremos individualmente la gestación de cada uno de los tres ingredientes de esa transformación que acabamos de citar.

El agravio moral como base de un marco de interpretación común

Doug McAdam, Sidney Tarrow y Charles Tilly definen los mecanismos cognitivos como aquellos que «operan mediante alteraciones de la percepción individual y colectiva» (McAdam, Tilly y Tarrow, 2005: 27). En el curso de la movilización social, estos son tanto causa como consecuencia de la acción colectiva. En otras palabras, una alteración del marco interpretativo (por ejemplo, de la percepción de la estructura de oportunidades políticas) puede actuar como factor desencadenante de un episodio contencioso, pero también puede sobrevenir como resultado de la lucha social y representar un giro decisivo en esta. A lo largo de la primera mitad del siglo XIX, los mecanismos cognitivos figuran de forma muy preeminente en el desarrollo de todo el proceso de formación de la clase obrera. En cierta manera, podríamos incluso describir tal proceso como una larga cadena de alteraciones de la percepción a través de la movilización, una cadena cuyo resultado final no es otro que una nueva forma generalizada de concebir los intereses propios y las identidades por parte de toda la sociedad inglesa.

Para comprender correctamente dicha cadena, debemos remontarnos a un concepto clave en toda la obra del historiador inglés: lo que él denominó la «economía moral de los pobres». En su artículo de 1971 «The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century», Thompson afirma lo siguiente:

> Detrás de cada motín del siglo XVIII, no había tan solo un incremento de los precios o una hambruna de los campesinos, sino un consenso sobre lo que eran prácticas legítimas e ilegítimas, un conjunto de normas y obligaciones sociales que constituye *la economía moral de los pob*res (Thompson, 1971: 78-79).

En los tiempos inmediatamente previos e iniciales de la Revolución industrial, dicho «conjunto de normas y obligaciones sociales» incluía, entre otras cosas, una estricta regulación de la compra-venta de alimentos para evitar su acaparamiento y la posterior especulación con los precios (lo que Thompson denomina una «regulación paternalista del mercado»), pero también una serie de derechos de uso de las tierras comunales en el campo, o una severa normativa relativa al acceso a los diferentes oficios a través del aprendizaje y a la contratación y la remuneración de las diferentes categorías de oficiales artesanos en los centros urbanos.

La gradual introducción de la ley de la oferta y la demanda en las prácticas comerciales y la consiguiente liberalización progresiva de la compra-venta y los precios de los alimentos básicos fueron ya causa de numerosos motines en el siglo XVIII, tanto en el campo como en las ciudades. Se trataba, sin embargo, de acciones descoordinadas entre sí y de ámbito local, destinadas principalmente a restituir los principios regulatorios tradicionales, acciones que, en muchos casos, todavía contaban con la aquiescencia de los magistrados encargados de hacer cumplir la ley. Además, las actuaciones iban habitualmente dirigidas contra personas particulares que, con frecuencia cada vez mayor y más visiblemente en épocas de penuria, violentaban los principios de la «economía moral» popular.

Ciertamente, lo que guiaba y legitimaba ese tipo de actuaciones contenciosas no era tan solo —y ni siquiera en primer lugar, según Thompson— la necesidad económica, sino, por encima de todo, el agravio moral sentido por la población ante prácticas comerciales consideradas ilícitas. Ese mismo sentimiento de agravio moral sería el que presidiría las reacciones de los trabajadores a las nuevas imposiciones legales que tuvieron lugar al entrar en el siglo XIX.

En el campo inglés, el periodo del cambio de siglo fue el momento de la imposición por parte de un Parlamento de propietarios y juristas de las definiciones capitalistas de la propiedad sobre las aldeas, lo que conllevó la revocación de los derechos tradicionales propios de una sociedad aristocrática paternalista. En otras palabras, los cercados de terrenos comunales que se llevaron a cabo en este periodo supusieron el desmantelamiento de la red de protección social de los pobres del campo (sus derechos de explotación de los comunes: pastos, bosques y tierras arables) y su sustitución por un sistema de impuestos para la asistencia de los pobres (las llamadas *Poor Laws)* que tan solo generaron una mayor miseria y una fuerte desmoralización entre los jornaleros y los trabajadores agrícolas, al dejar estos de depender para su subsistencia de su propio trabajo y pasar a vivir de la caridad del Estado.

En los centros artesanales, por su parte, antes de los cambios operados por la Revolución industrial en los modos de producción, existía una jerarquía social de oficios —así como dentro de cada oficio— definida en función del grado de destreza y los conocimientos precisos para su desempeño. Además, las diferencias de salario se correspondían también con una gradación de prestigio social. Existía, por otra parte, un recorrido dentro de cada oficio que se iniciaba con la admisión al aprendizaje. Así, «[e]n las primeras discusiones de las *trade unions*», señala Thompson,

> eran tan destacados los criterios sociales y morales —la subsistencia, la dignidad, el orgullo de ciertos valores de la artesanía, las retribuciones tradicionales para los diversos grados de destreza—, como los argumentos estrictamente económicos (Thompson, 2012: 266).

Durante las primeras décadas del siglo XIX, cada oficio siguió una evolución distinta en función de su grado de organización, de la posibilidad de los artesanos de adquirir sus propias herramientas y materias primas, de la presencia o no de fábricas y de grandes intermediarios comerciales, etc. No obstante, todos los oficios se vieron igualmente afectados por la revocación de las regulaciones referentes al aprendizaje promovidas por los grandes patronos industriales a fin de poder emplear a trabajadores no-cualificados y abaratar los costes del trabajo. Igualmente, aunque en distinta medida, todos ellos sintieron la pérdida de su antiguo prestigio social, una pérdida que, en aquellos oficios más directamente afectados por la mecanización y la presencia de grandes intermediarios (que proporcionaban las materias primas y las herramientas a los trabajadores a domicilio y recogían el producto procesado), fue acompañada además de una fuerte degradación económica.

Como ejemplo de todos estos efectos, Thompson describe en detalle la trayectoria seguida por uno de los oficios más significativos: el de los tejedores. Antes de 1780, explica, existían tres grandes categorías de tejedores, a saber: el artesano superior que producía para diversos patronos; el oficial, que trabajaba para un taller (a veces en su propia casa), y el agricultor que obtenía unos ingresos extraordinarios trabajando en su hogar a tiempo parcial. Entre 1780 y 1830, las tres categorías acabaron fundidas en una sola: los proletarios a domicilio que tejían para una fábrica o un intermediario en condiciones cada vez más deshonrosas. «Atribuir la causa de la degradación de las condiciones de los tejedores al telar mecánico constituye una simplificación excesiva», afirma el autor (Thompson, 2012: 312). En realidad, el declive salarial del oficio fue previo a la competencia con los telares mecánicos, y fue consecuencia de una ofensiva patronal para abaratar los salarios que pasó, primero, por ejercer el control total de la demanda de producción y, posteriormente, por la supresión de las antiguas regulaciones del oficio y, principalmente, de los requisitos de la institución del

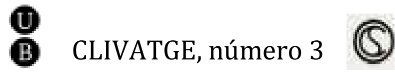
aprendizaje. La consecuencia final fue que, al concluir el proceso, «la gran mayoría de los tejedores [...] vivía al borde de los límites del hambre» (Thompson, 2012: 319).

En esas condiciones, entrar a trabajar en la fábrica se veía, a pesar de las retribuciones salariales comparativamente favorables, como una pérdida de posición social: el paso de la condición de trabajador con interés propio, por muy pobre que fuese, a la de empleado dependiente o mera «mano de obra». Dicho esto, no es de extrañar que la contribución de los tejedores a los primeros movimientos obreros fuera sustancial. En la medida en que se mantenía vivo el recuerdo de una época dorada aún cercana, la sensación de agravio moral era en ellos todavía más vívida.

Regresemos ahora sobre el sentimiento de agravio general experimentado por los trabajadores ingleses a lo largo de todo el periodo de 1790-1832. La progresiva introducción de maquinaria industrial en los procesos de producción de bienes; las nuevas definiciones de la propiedad de la tierra y de las relaciones laborales en la producción agrícola, y la nueva relevancia de los intermediarios comerciales que compraban a los pequeños productores en talleres artesanos y a los trabajadores a domicilio para vender a los grandes industriales y comerciantes, provocaron todos ellos nuevas injusticias sentidas. Thompson enumera las siguientes: (1) la ascensión de una clase de patronos carente de la autoridad y las obligaciones paternalistas tradicionales; (2) el aumento de la distancia entre el patrono, industrial o agrícola, y el hombre; (3) la transparencia de la explotación como origen de la nueva riqueza y el nuevo poder; (4) el empeoramiento de las condiciones del trabajador; (5) la reducción de este a una dependencia total con respecto a los elementos de producción de los grandes patronos; (6) el sentimiento de la parcialidad de la ley. Además, la nueva organización del trabajo también tuvo una fuerte repercusión en el plano de la vida ordinaria, donde se sintieron los siguientes agravios: (7) la descomposición de la economía familiar tradicional; (8) la nueva disciplina, la monotonía y las largas jornadas del trabajo fabril; (9) la pérdida de tiempo libre y de distracciones, y, en definitiva, (10) la reducción del hombre a la categoría de un mero instrumento (Thompson, 2012: 228).

Algunos de los conflictos más ásperos de aquellos años versaron sobre temas distintos del coste de la vida. Desaparecidas las principales instituciones del paternalismo del antiguo régimen, el trabajador siente que se ha convertido en «una entrada más entre las demás partidas del coste» (Thompson, 2012: 229). En definitiva, una mala cosecha y la consiguiente hambruna eran sin duda hechos que estaban más allá de la elección humana pero, claramente, la forma en que tales hechos afectaban a la vida de la población «tenía que ver con las condiciones de un complejo particular de relaciones humanas: ley, propiedad y poder» (Thompson: 2012: 231).

Las respuestas a todos estos agravios sentidos de los distintos grupos de oficio, así como de los pequeños agricultores y los jornaleros del campo, se

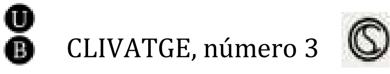


desarrollarían a partir de 1793 en un régimen de clandestinidad impuesto por la represión contrarrevolucionaria inaugurada en la década de 1790. Como veremos, las reivindicaciones particulares oscilarían entre las demandas de reforma política y las demandas estrictamente laborales, hasta quedar ambas fundidas en una sola ideología que propugnaba la democracia participativa y la propiedad colectiva. En paralelo, el carácter inicialmente sectorial y geográficamente limitado de las movilizaciones de los trabajadores iría evolucionando con la progresión de las luchas obreras hasta desembocar en un movimiento intersectorial unitario y de carácter nacional.

Organizaciones nacionales de clase

Durante la primera mitad del siglo XIX, los motines populares espontáneos que habían caracterizado el siglo XVIII alternaron progresivamente con acciones directas mejor organizadas que denotaban la progresiva asociación de los afectados por los cambios económicos que se estaban produciendo. Como ya hemos comentado más arriba, el mismo sentimiento de agravio moral que había motivado los motines del siglo XVIII continuó siendo uno de los motores primordiales de la constante agitación de obreros y campesinos en el siglo siguiente y, finalmente, resultaría crucial para la nueva estructuración resultante de la sociedad. En este periodo, asistimos al endurecimiento de las leyes por lo que respecta a los delitos contra la propiedad, que ahora abarcaban también el derribo de vallas en los cercados de tierras comunales, la destrucción de telares en las protestas y los motines industriales, además de los hurtos y saqueos que se producían durante los episodios de sublevación popular a la sombra de la impunidad que proporcionaba el número de insurrectos. Gradualmente, se iba produciendo un distanciamiento cada vez mayor entre el código legal y el código moral popular al que hacíamos mención más arriba.

Así pues, a partir de 1790 y en paralelo a los sucesos de la Revolución Francesa, se produce una década de agitación política que, según Thompson, «alteró las actitudes subpolíticas del pueblo, afectó a los alineamientos de clase e inició tradiciones que se extienden hasta el presente siglo [XX]» (Thompson, 2012: 127). En particular, las principales protestas perdieron por un tiempo su carácter espontáneo y local, así como su motivación fundamentalmente económica, y cobraron ahora un nuevo carácter eminentemente político. Ante el fuerte cariz liberalizador que estaba tomando la legislación del Parlamento, las clases excluidas de la participación política reclamaban su inclusión en la toma política de decisiones dentro de un poder legislativo reformado. Los agravios sentidos aún no habían variado mucho, pero la estructura de oportunidades inaugurada por la




Revolución Francesa había redigirido las principales reivindicaciones hacia un nuevo terreno.

El principal ideólogo de las revueltas fue Tom Paine, autor de *Los derechos del hombre,* uno de los ingredientes fundamentales del pensamiento obrero que comenzaba a gestarse. El eje impulsor de la larga oleada revueltas de la década de 1790 fue la reforma de la Constitución de 1688 para extender la participación electoral a todos los ciudadanos varones e instaurar la república: «obreros de pueblos y ciudades de todo el país […] exigían derechos generales para sí» (Thompson, 2012: 129).

La primera respuesta del Gobierno a la proliferación de sociedades jacobinas guiadas por la obra de Paine y a la agitación de pequeños artesanos y obreros fue la potenciación del contramovimiento tradicionalista Iglesia y Rey y la movilización de muchedumbres pagadas que desfilaban en procesión y quemaban efigies de Paine. El inicio de la guerra con la Francia revolucionaria dio paso a severas medidas para la represión del movimiento jacobino interno. Sin embargo, el endurecimiento de la persecución de las sociedades populares presentes tras las movilizaciones jacobinas tan solo provocó la radicalización de estas. Así, en 1793, la mayoría de los reformadores organizados en sociedades eran pequeños artesanos, asalariados, pequeños menestrales y hombres de oficio, mientras que la pequeña aristocracia y la burguesía reformistas habían abandonado ya el movimiento. En Inglaterra, pues, la alianza «natural» en otros países entre las élites reformistas y los trabajadores solo se había producido durante un breve periodo de 1792.

Desde la forzosa clandestinidad, se produce en estos momentos el primer intento de organizar a los movilizados en el ámbito nacional: la Convención Nacional de Edimburgo. Tras esta, en 1794, la represión se intensifica aún más: se detiene a los principales líderes de las agitaciones y se dictamina la suspensión del *habeas corpus.* Nuevamente, la persecución solo logra apartar de las sociedades jacobinas a los miembros más moderados y radicalizar la posición de los que aún resisten. Además de ello, la escasez económica provocada por la guerra traslada una vez más el énfasis de las reivindicaciones políticas a las reivindicaciones económicas: reducción de impuestos, o incluso expropiación y propiedad colectiva.

El año de 1795 marca un punto de inflexión definitivo. En Londres, una manifestación de 200.000 personas asalta el carruaje del rey y el Gobierno responde ahora con una severa limitación de las libertades de reunión y expresión. Las nuevas leyes represivas provocan la exacerbación del conflicto. En noviembre de ese año, se producen en todo el país las mayores movilizaciones conocidas hasta entonces. En 1797, tiene lugar el amotinamiento general de la marina, instigado por los jacobinos. En respuesta, el Gobierno crea asociaciones armadas leales y cuerpos de voluntarios destinados tanto a luchar contra el invasor francés como a la represión de la conspiración interna. Además, en estos momentos la cuestión del apoyo a una eventual invasión francesa genera tensiones en el seno mismo de los

movilizados. Por fin, hacia 1799 casi todos los dirigentes jacobinos se hallan encarcelados o en el exilio, y se puede dar por definitivamente neutralizado el movimiento revolucionario.

La composición social de los clubes jacobinos británicos era básicamente de oficiales y artesanos cualificados e instruidos, aunque privados de poder civil. Sus reuniones tenían lugar en tabernas, y discurrían con buen orden y organización. En ellas se discutía el texto clave de Paine, *Los derechos del hombre,* que propugnaba el primado de la razón sobre la tradición, de la reflexión política sobre el orden establecido, en línea con la Ilustración y los ideales de la Revolución Francesa. Las sociedades más grandes contaban con decenas de miles de miembros, que contribuían a la asociación con una cuota semanal. Sin embargo, el baluarte de los jacobinos ingleses no fueron nunca las nuevas ciudades fabriles, sino más bien los viejos centros urbanos artesanos. Así pues, si bien este primer periodo de agitación organizada y masiva de la década de 1790 no fue un periodo de movilización obrera en el sentido en el que hoy la entenderíamos, sí que, por primera vez, provocó la fusión de las reivindicaciones políticas (república, sufragio universal) con las demandas económicas (impuestos, colectivización). La dureza de la persecución y la represión del jacobinismo desde 1792 hasta 1798 marcaría el posterior desarrollo clandestino de las primeras acciones propiamente obreras: el ludismo y el *trade unionism.*

En definitiva, podemos decir que la aristocracia y los fabricantes, alarmados por el ejemplo francés, habían hecho causa común. Los fabricantes recibieron a cambio importantes concesiones, en especial, la derogación de la vieja legislación «paternalista», que protegía el aprendizaje y regulaba los salarios y las condiciones de trabajo en la industria. Mientras que la aristocracia estaba interesada en reprimir las «conspiraciones» jacobinas del pueblo, lo que deseaban los fabricantes era frustrar las «conspiraciones» para aumentar los salarios. La represión de los años de 1790 (y las décadas posteriores) sirvió a ambos fines. En consecuencia, en lo sucesivo los trabajadores ingleses se vieron sometidos simultáneamente a la intensificación de dos tipos de relaciones intolerables: las de explotación económica y las de opresión política (véase Thompson, 2012: 224-225).

Así, desde 1799 hasta 1824, toda la oposición política y laboral de los excluidos de la Revolución industrial discurrirá bajo la sombra de las *Combination Acts,* un conjunto de leyes represivas que prohíben cualquier tipo de asociación sindical o política: *trade unions,* clubes políticos radicales, etc. Estas, sin embargo, respetan las sociedades de socorro mutuo, supuestamente al margen de cualquier actividad política o reivindicativa, a la sombra de las cuales se organizarían numerosas *trade unions* locales de distintos oficios.

El periodo de 1811-1817 fue el momento del movimiento ludita y la destrucción organizada de maquinaria industrial. El ludismo se circunscribió a tres demarcaciones en el centro-norte del país (Nottingham, el West Riding y el sur del Lancashire) y a tres oficios especialmente afectados por la industrialización: los

tundidores de lana, los tejedores de algodón y los calceteros (o tejedores de medias). En 1809 se revocaron las leyes que limitaban el uso de maquinaria y el empleo de obreros no-cualificados en las industrias. El movimiento ludita estalló dos años después en Nottingham, en paralelo a la presentación en el Parlamento de una iniciativa legislativa para que se regulasen los precios de las medias y se remunerase a sus productores según la calidad de estas, iniciativa promovida por una ilegal *trade union* de tejedores. Desde Nottingham, el ejemplo de las acciones luditas se extendió hacia el norte por un mecanismo de correduría y otro, simplemente, de imitación. A imagen de las revueltas del siglo anterior, las acciones luditas fueron dirigidas únicamente contra objetivos que violaban manifiestamente las buenas prácticas empresariales, según la propia economía moral de los participantes. Las demandas luditas eran fundamentalmente laborales, aunque en ciertos lugares y momentos pudieran incluir también objetivos políticos más generales. A lo largo de los años que duró el movimiento, y en sus distintos momentos, estas incorporaron los siguientes puntos: (1) un salario mínimo legal, (2) el control de la explotación de las mujeres y los jóvenes, (3) el arbitraje en conflictos laborales, (4) el compromiso de hallar una ocupación para quienes perdieran la suya debido a la introducción de maquinaria, (5) la prohibición de la producción de ínfima calidad, (6) el derecho de organización legal de *trade unions* (Thompson, 2012: 596-597).

En el polo social opuesto, el ludismo provocó la unión de *tories* (terratenientes) y *whigs* (capitalistas), previamente enfrentados en el Parlamento, y exacerbó la postura de los obreros en su contra. Además, la reacción del Gobierno ante el movimiento consistió en ahondar en la legislación a favor de los fabricantes. Así, pues, a la retirada de las leyes que protegían el oficio de la lana en 1809, siguieron la supresión de las cláusulas relativas al aprendizaje, en 1813, y la de las que otorgaban a los magistrados locales la potestad de imponer un salario mínimo, en 1814, con lo que en estos años quedó definitivamente barrido todo el código paternalista anterior. Aun así, las diversas situaciones por las que atravesaban los distintos oficios hacía aún difícil lograr una verdadera unidad de acción entre ellos. Tras el fracaso de los métodos luditas de acción directa, en las tres áreas en las que el ludismo estuvo presente, la agitación a favor de la reforma parlamentaria se inició justo en el punto en que el ludismo había sido derrotado (Thompson, 2012: 649).

En consecuencia, entre 1815 y 1820, asistimos a un nuevo despertar del radicalismo a favor de la reforma política, apoyado en la denuncia de los abusos del poder: impuestos, corrupción, sinecuras… El fenómeno no era nada nuevo en Londres, aunque en estos años alcanzó formas más conscientes y mejor organizadas. Sin embargo, lo que sí fue nuevo en estos años fue el cambio de las actitudes de las masas de las provincias.

La principal base organizativa de estos años son los clubes Hampden. El primer club Hampden se fundó en Londres en 1812, y estaba formado por un grupo de reformadores *whig* dispuestos a hacer campaña por la reforma

parlamentaria. Tras una intensa y prolongada campaña del comandante Cartwright por toda Inglaterra, hacia 1816 los clubes Hampden se extienden ya por todo el país. Aun así, las características del movimiento difieren notablemente de una región a otra tanto en las estrategias que se plantean como en los distintos acentos de las reivindicaciones.

En Londres, además, el movimiento por la reforma política estaba aún más dividido, si cabe, con la presencia de toda una pléyade de organizaciones en torno a diferentes figuras, con distintas bases ideológicas (socialismo agrario, reforma parlamentaria) y estrategias (insurrección, golpe de Estado, presentación de peticiones, iniciativas legislativas parlamentarias...). El club informal y las reuniones en las tabernas siguen siendo formas populares de organización, y el paso de estos a un club radical declarado, fuera este un club Hampden o una *political union,* representaba ya un gran avance organizativo. Pese a todo, los clubes Hampden representaron un intento de organización en los niveles regional y nacional que superaba con mucho el ámbito local.

En 1816, tienen lugar las primeras acciones multitudinarias a favor de la reforma parlamentaria, en Spa Fields (Londres). Se trata de grandes concentraciones con un marcado carácter ritual, donde los oradores declamaban y lanzaban al público preguntas retóricas a fin de obtener respuestas tumultuosas. En esa ocasión, los asistentes al mitin de Spa Fields intentaron tomar al asalto la Torre de Londres y desencadenaron una nueva oleada de represión por parte del Gobierno.

Días después de los mítines de Spa Fields, tuvo lugar la primera convención nacional de los clubes Hampden, donde tan solo se hizo patente la falta de unidad del movimiento. Así pues, este nuevo intento de organización política nacional acabó una vez más en agua de borrajas.

Por lo que respecta al movimiento de las *trade unions,* dos años después, en 1818, se produjo una importante huelga de obreros fabriles de las hilaturas y tuvo lugar el intento de organizar una *General Union of Trades,* o gran sindicato nacional multisectorial, intento que acabó también en fracaso ante la fuerte represión. Sin embargo, aún quedaba lejos la confluencia de artesanos y gentes de oficio, que formaban la base del movimiento político radical, con los obreros fabriles, que se organizaban de forma independiente. Radicalismo político y sindicalismo obrero no acabarían confluyendo hasta la siguiente década de 1820.

En 1819 asistimos a los sucesos de «Peterloo»,[1] que resultarían decisivos para el cariz que acabaría cobrando la protesta obrera en los años de 1820. Peterloo es la culminación de una serie de grandes manifestaciones a favor de la reforma constitucional que habían discurrido de manera ordenada, pacífica y disciplinada. Las principales reivindicaciones eran de carácter político: el derecho

[1] Los sucesos ocurrieron en Saint Peter's Field, en Manchester. El nombre de «Peterloo» es en referencia a la batalla de Waterloo, acaecida cuatro años antes y todavía fresca en la memoria popular.

de organización política, la libertad de prensa y la libertad de reunión y manifestación pública. En Peterloo, una multitud pacífica, con una gran cantidad de mujeres y niños entre los participantes, fue reprimida salvajemente por jinetes armados con sables y pertenecientes a las clases dominantes y al ejército, que provocaron una brutal matanza entre los manifestantes.

La oleada nacional de indignación que siguió a los sucesos de Peterloo provocó el surgimiento de nuevos clubes radicales y *political unions,* que ahora se organizaron igualmente para defenderse contra la agresión física de los legitimistas. Entre las consecuencias de la represión de Peterloo se cuenta también una conspiración, en febrero de 1820, para asesinar a los ministros responsables de la matanza: la conocida como la conspiración de la calle Cato, que fue abortada a tiempo.

La década de 1820 es más tranquila que las tres anteriores por lo que respecta a la movilización popular activa, pero son años definitivos para la estructuración de la conciencia de clase, al hilo de la lucha por la libertad de prensa; de la extensión y el crecimiento de la organización de los obreros en *trade unions,* y de la experimentación activa de la economía cooperativa realizada por las sociedades owenitas.

Richard Owen era un propietario de fábrica paternalista que fomentó la creación de comunidades experimentales de carácter cooperativo. Su iniciativa se extendió con rapidez en círculos obreros y entre los pequeños talleres artesanos, donde surgieron también nuevas prácticas cooperativas tales como los bancos de intercambio de bienes y servicios. Owen pasó unos años en América y, al regresar, se encontró con que su movimiento cooperativo se había convertido en un fenómeno de masas. Entre 1829 y 1834, el owenismo no dejó de progresar. En los distritos con una fuerte tradición sindicalista y de ayuda mutua (sociedades de socorro), la cooperación owenita representaba la oportunidad de que racionalistas y cristianos, radicales y gentes políticamente neutrales pudieran trabajar juntos. Las comunidades experimentales promovidas por Owen acabaron fracasando en su mayoría, pero antes de desaparecer habían dejado ya una fuerte impronta en la ideología obrera que se estaba gestando.

Al entrar en la década de 1830, desde 1831 hasta mayo de 1932, se suceden movilizaciones masivas —más de 100.000 personas— por la reforma constitucional en todas las principales poblaciones inglesas. En los días previos a la aprobación definitiva del proyecto de reforma, tienen lugar grandes desórdenes y enfrentamientos entre los partidarios y los detractores de este, entre los defensores del sufragio universal y del sufragio censitario, etc. Esta nueva oleada de contienda política en Inglaterra coincide con la revolución de 1830 en Francia y, en cierta medida, es animada por esta. En el otoño de 1831 y en los días de mayo de 1832, se puede afirmar que Inglaterra estuvo al borde de una revolución. El pacto de reforma final fue el resultado del miedo de las clases propietarias a una revolución y del temor de las clases medias a perder la dirección del proceso frente

a la presión y el liderazgo de los sectores trabajadores, ya altamente organizados, en las movilizaciones, y excluyó de las decisiones políticas a los obreros, que vieron que nada cambiaba para ellos. Así, la línea de demarcación de la clase obrera frente a las demás clases quedó trazada en Inglaterra con las restricciones del derecho al voto de 1832.

La contienda y las reivindicaciones laborales obreras continuarían, ahora con una mayor unidad y conciencia de sí mismos de los participantes. Las *trade unions* perseverarían en su lucha por la jornada de 10 horas, mientras que las *political unions* no cejarían en su intento por lograr el derecho universal al voto. A partir de 1838, ambas demandas confluirían definitivamente en el movimiento cartista.

La conciencia de clase que nació en esos años consistió en una conciencia de la identidad de intereses entre trabajadores de las más diversas ocupaciones y niveles laborales, y se plasmó en una diversidad de formas institucionales (sobre todo, en el sindicalismo generalizado a partir de 1830) y en la maduración de la aspiración a un sistema alternativo.

Una visión alternativa de la sociedad

La lucha por la libertad de prensa ejerció una influencia formativa central en la configuración de la nueva conciencia de clase. Los pensadores radicales encontraron en la prensa un modo de «multiplicación moral, una forma de extender las ideas entre la población, y entre 1816 y 1836 pareció producirse esta "multiplicación"» (Thompson, 2012: 784). Junto a la prensa, las baladas, el teatro, las viñetas... se convirtieron también en exitosos difusores del pensamiento radical. Además, a partir de cierto punto en el proceso que acabamos de describir, el obrero autodidacta pasó a adquirir su formación en grupos de lectura y discusión, en sociedades de aprendizaje colectivo que se reunían semanalmente para intercambiar pensamientos.

Entre 1817 y 1832, cuatro tendencias de la prensa radical confluirían en la formación de una conciencia política de clase: (1) la tradición racionalista jacobina de Tom Paine y Richard Carlile; (2) los utilitaristas obreros agrupados en torno al *Gorgon* de John Wade; (3) los sindicalistas o *trade unionists,* cuyo órgano difusor era *The Trades Newspaper* de John Gast, y (4) la diversidad de tendencias asociadas al cooperativismo owenita. El resultado sería una visión alternativa de la sociedad centrada en la democracia política y el socialismo económico.

La aportación ideológica de Paine y Carlile fue especialmente destacada en los primeros tiempos del macroproceso que aquí nos ocupa. En esencia, estos sostenían que ningún ciudadano debe respeto a la autoridad o a la tradición, sino

tan solo a su propia razón. Sin embargo, ambos eran por otra parte contrarios al sometimiento del individuo a toda disciplina de partido o asociación. Defendían primordialmente la acción individual, con el único organizador de la fuerza de la razón y con la prensa como factor multiplicador.

John Wade y su *Gorgon*, por su parte, defendían que «la utilidad general es el único y último objetivo de la sociedad, y no debemos considerar sagrado ningún derecho natural o legal que se pueda oponer a ella» (Thompson, 2012: 822). Siguiendo su propio principio utilitarista, Wade dividía la sociedad en clases parasitarias y productivas. Estas últimas incluían tanto a los obreros y los profesionales como a los patronos. Para él, y siguiendo a Ricardo, el trabajo es la fuente de todo valor. Sin embargo, la recompensa por el trabajo debía regularse por la ley de la oferta y la demanda, y cualquier otra forma de determinación de dicha recompensa, como la acción sindical, debía considerarse antinatural.

John Gast era un organizador obrero de los astilleros de Londres. Su diario, *The Trades Newspaper,* era la voz de los oficios de la capital y el gran defensor de la organización obrera. Gast rechazaba la existencia de una economía política natural basada en la oferta y la demanda, y afirmaba que lo que conviene a los patronos puede no convenir a los obreros. Daba por supuesto un antagonismo fundamental de intereses entre ambos, y creía que la resolución de dicho antagonismo es una cuestión de fuerza. Para él, la guerra entre capital y trabajo no finalizaría hasta que el obrero recibiera todo el producto de su propio trabajo.

Por último, el socialismo owenita aportó un elemento ideológico constructivo al movimiento obrero, frente a muchas otras opciones críticas meramente destructivas. Como alternativa a la explotación industrial, propugnaba la organización de los obreros en comunidades productivas de tipo cooperativo, y dio pie al surgimiento paralelo de sistemas no-monetarios de intercambio entre los miembros de los círculos owenitas. Aun así, el owenismo no dejaba de resultar un tanto ingenuo, al negarse a abordar en profundidad la cuestión de la propiedad de los medios de producción o el tema de la participación política de los trabajadores.

2. Una lección para leer el siglo XXI

En un escrito breve como el presente, resulta del todo imposible recoger tan solo una parte del detalle de la descripción que realiza Thompson del proceso de surgimiento de la conciencia de clase obrera en Inglaterra. Después de todo, se trata de casi un millar de páginas de minuciosa narración de los rituales de protesta, la vida cotidiana, los sentimientos y los razonamientos de los hombres y las mujeres trabajadores, todo ello a partir de un sinnúmero de fuentes primarias y

secundarias. No obstante, hemos intentado trazar aquí la trayectoria más general seguida por ese proceso nacional de cambio histórico radical, así como aislar algunos de los elementos que consideramos más destacados y que pueden contribuir a orientarnos en la lectura de nuestra sociedad occidental contemporánea. Ha llegado el momento de establecer comparaciones entre ambos periodos.

Principales transformaciones económicas en el cambio de siglo

En primer lugar, los cambios sociales que hemos descrito para la primera mitad del siglo XIX estuvieron presididos por el desarrollo del modo de producción industrial y la imposición forzosa sobre los trabajadores de las nuevas formas de propiedad capitalistas y las relaciones sociales asociadas a estas. En definitiva, lo que todo ello implicó fue la desaparición de las instituciones de protección social del Antiguo Régimen, basadas en los derechos comunales, la regulación paternalista del mercado (principalmente de los precios de los alimentos) y una severa regulación de los oficios artesanos. Como consecuencia, y como acertadamente señaló Marx en su momento, el nuevo régimen liberal-capitalista hizo sentir a los trabajadores dos de sus peores características: la pauperización y la enajenación de los obreros. La respuesta a ambas fue el surgimiento, guiado por el agravio moral sentido, de un nuevo tipo de solidaridad social obrera, gestada en la lucha contra las clases propietarias.

En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en los Estados occidentales industrializados, tuvo lugar la creación de un nuevo régimen de instituciones de protección social que dio en denominarse Estado de bienestar, basado al menos en el acceso universal a la educación y la sanidad —ambas de titularidad pública—, así como en un robusto sistema de pensiones de jubilación y desempleo, además de en una rígida legislación laboral destinada a promover la estabilidad del empleo y de los salarios, y en algunos países, también la participación de los obreros en la toma de decisiones empresariales a través de los sindicatos.

Tras las movilizaciones de mayo de 1968 y la crisis del petróleo de 1973, se inicia un conjunto de transformaciones en la estructura del capitalismo imperante hasta esos momentos que acabarán conduciendo a la situación actual. En particular, las reformas neoliberales emprendidas por Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido, y gradualmente implantadas en el resto de los países de la Europa occidental, dan pie a los siguientes desarrollos: (1) la globalización de las finanzas y la producción de bienes y servicios, acompañada de un proceso de desindustrialización de los países

desarrollados y una fuerte terciarización de sus economías; (2) el ascenso de grandes corporaciones cuasi-monopolistas de alcance mundial; (3) una fuerte financiarización de la acumulación capitalista; (4) la disminución relativa del trabajo asalariado dependiente en favor de los pequeños emprendedores y los profesionales autónomos, y (5) la creciente privatización de las empresas públicas y de los proveedores de los servicios vinculados al Estado de bienestar. Simultáneamente, el enorme desarrollo paralelo de las tecnologías de la información y la comunicación produce: (1) el surgimiento de un nuevo y poderoso sector industrial de las telecomunicaciones, también de ámbito global, además de (2) la reconversión de sectores enteros de la antigua producción industrial en generadores de productos digitales (muy notable en el ámbito de la cultura) y, más modernamente, (3) la creciente robotización de los procesos mismos de producción industrial; sin olvidar (4) el gran impulso a la globalización financiera hecho posible por la implantación de las TIC.

Si bien ninguno de esos cambios representa una transformación radical del régimen económico capitalista imperante desde comienzos del siglo XIX (en realidad, algunos de ellos, como la financiarización, no son ni siquiera totalmente nuevos en el desarrollo del capitalismo), sí que todos ellos conjuntamente han tenido efectos notables sobre la estructura social previa, surgida a través de procesos como los descritos por Thompson, además de provocar también una transformación de la estructura de la desigualdad social imperante.

Algunos rasgos de la estructura social del siglo XXI

En *La sociedad del riesgo*, el sociólogo alemán Ulrich Beck describía gráficamente los efectos del Estado de bienestar sobre la clase obrera del siguiente modo:

> [S]obre el trasfondo de los derechos sociales y políticos obtenidos [los obreros] son desprendidos de los nexos de clase del mundo de la vida y se ven remitidos cada vez más a sí mismos para obtener su sustento. Regulada por el Estado de bienestar, la extensión del trabajo asalariado se convierte en una *individualización* de las clases sociales. […] Tomemos el ejemplo del *derecho laboral*. […] [C]on la realización jurídica de los intereses de los trabajadores han surgido ahora diversos derechos *individuales* (en la protección ante el despido, en el seguro de desempleo, en la formación, etc.) que el individuo tiene que reclamar recurriendo a la oficina de empleo o, si fuera necesario, a los tribunales. La juridificación ha trasladado al movimiento obrero *de la calle a los despachos* donde se lleva a cabo, como esperar, sentarse, volver a esperar, volver a sentarse, rellenar un formulario, rellenar otro y como conversación de asesoramiento con el funcionario competente, que

> transforma el antiguo «destino de clase» en las categorías jurídicas individualizadoras del «caso particular». [...] [B]ajo las condiciones del Estado de bienestar la realización del trabajo asalariado impulsa la *disolución* de la sociedad de clases tradicional (Beck, 1998: 108, 110).

Como comprobamos, la posición de Beck solo ahonda en la postura de Thompson de que la clase no es una mera posición estructural, sino una realidad visible en la actuación colectiva. Sin embargo, Beck, a pesar de constatar la desaparición de esa realidad visible en la Alemania de la posguerra (la obra está publicada originalmente en 1986), deja también la puerta abierta a la posibilidad de surgimiento de nuevas formaciones sociales si se alteran las circunstancias que han provocado la individualización social (la ruptura de la cohesión social a la que hacía referencia Wieviorka):

> [E]ste crecimiento objetivo de los trabajadores asalariados tiene lugar como una *generalización de la individuación,* si bien *hasta nuevo aviso.* Pues, por otra parte, esa supresión de las clases está vinculada a determinadas condiciones y, a su vez, puede ser suprimida con la puesta en peligro de estas condiciones. Lo que ha individualizado a las clases ayer y hoy puede convertirse mañana o pasado bajo otras condiciones (como desigualdades que se agudizan radicalmente: desempleo masivo, beneficios para las empresas mediante la automatización) en «procesos de formación de clases» novedosos, que ya no se pueden comprender tradicionalmente y presuponen la individuación alcanzada. «Capitalismo sin clases»: es decir, sin las clases que llegan del siglo XIX al XX, [...] y por tanto también sin «clase obrera»: es decir, con la posibilidad no excluida de procesos de formación de «clases» no tradicionales y que no respetan las fronteras de clase bajo las condiciones de una crisis del mercado laboral que se agudiza sistemáticamente (Beck, 1998: 110).

El posible cambio de condiciones que aquí pronostica Beck parece que ya se ha producido, y no solo por el advenimiento en 2007-2008 de una severa crisis económica en todo el mundo occidental, que ha elevado las tasas de desempleo en todos los países, y en algunos de ellos, hasta límites insoportables. Las semillas de la transformación del trabajo en la Europa occidental ya habían sido plantadas con anterioridad y, si acaso, la crisis económica solo ha alimentado la aceleración de las transformaciones. Examinemos ahora algunas de las dinámicas que han provocado dicha alteración de las condiciones en la Unión Europea.

En primer lugar, la deslocalización de la producción industrial y la desindustrialización de los Estados europeos, más o menos severa según los países, ha provocado la disminución del peso relativo del empleo industrial asalariado en todas las economías desarrolladas; un empleo fuertemente sindicado

y altamente garantista que, además, tradicionalmente había constituido la base del movimiento obrero.

En segundo lugar, sea bien como una de las respuestas a las demandas de Mayo de 1968, uno de cuyos focos era el carácter enajenante del trabajo dependiente —véase Boltanski y Chiapello (2005)—, o bien como estrategia para eludir las garantías establecidas por el derecho laboral aún imperante y rebajar los costes salariales, o bien, sencillamente, porque el desarrollo tecnológico y, muy en particular, el ascenso del peso en la ocupación del sector de las TIC sencillamente así lo han permitido, desde finales del siglo XX hemos asistido al ascenso de la ideología de la «emprendeduria», del autoempleo en definitiva, como rasgo cada vez más prominente de la estructura del mercado laboral. Figuras jurídicas como la del profesional autónomo o las microfirmas empresariales, no hace tanto limitadas a unas pocas ocupaciones fuertemente colegiadas y de elevada remuneración, se extienden ahora sin excepción a todos los ámbitos del sector terciario de la economía, la base misma de la actividad económica de los países desarrollados: producción y gestión cultural, marketing y publicidad, arquitectura, todo tipo de asesorías y consultorías (jurídica, legal, financiera, de comunicación, de innovación…), diseño y creación de productos tecnológicos e informáticos, etc. Un ejemplo extremo de ello lo hallamos en el sector de las empresas culturales y artísticas, donde los trabajadores empleados presentan elevadas tasas de autoempleo y diversas formas de subempleo forzoso (empleos a tiempo parcial no-deseado, trabajo intermitente, menos horas de trabajo), y se ven obligados a compaginar múltiples empleos. A pesar de su elevado grado de formación, su remuneración es menor que la de los trabajadores de su categoría ocupacional de referencia, (trabajadores profesionales, técnicos y similares, con características comparables en cuanto a capital humano: educación, formación y edad), y presentan una gran desigualdad y variabilidad de rentas. En particular, en el mercado laboral de la cultura predominan los trabajadores por cuenta propia o con contratos más o menos breves y por proyectos que, al igual que los trabajadores en las carreras profesionales, dependen de la formación previa y la experiencia laboral acumulada para aspirar a nuevos contratos. Por otra parte, de forma equiparable a los pequeños empresarios, esos mismos trabajadores están pendientes de aprovechar las oportunidades que les brinda el mercado y gestionan su carrera profesional mediante estrategias de diversificación de riesgos (Menger, 1999: 545).

Eso no ha hecho sino acrecentar la individualización de la sociedad y/o la ruptura de la cohesión social que Beck y Wieviorka describían, hasta el punto de que Byung-Chul Han, filósofo surcoreano afincado en Alemania, ha podido afirmar lo siguiente:

> El neoliberalismo convierte al trabajador oprimido en empresario, en empleador de sí mismo. Hoy cada uno es un trabajador que se explota a sí mismo en su propia

> empresa. […] También la lucha de clases se convierte en una lucha interna consigo mismo: el que fracasa se culpa a sí mismo y se avergüenza. Uno se cuestiona a sí mismo, no a la sociedad. […]
>
> Hoy no hay ninguna *multitude* cooperante, interconectada, capaz de convertirse en una masa protestante y revolucionaria global. Por el contrario, la *solitude* del autoempleador aislado, separado, constituye el modo de producción presente. Antes, los empresarios competían entre sí. Pero dentro de la empresa era posible una solidaridad. Hoy compiten todos contra todos, también dentro de la empresa. La competencia total conlleva un enorme aumento de la productividad, pero destruye la solidaridad y el sentido de comunidad. No se forma una masa revolucionaria con individuos agotados, depresivos, aislados (Han, 2014).

En el artículo que acabamos de citar, Han resumía sus propios argumentos en una polémica sostenida con Antonio Negri en el auditorio Schaubühne de Berlín sobre las posibilidades de transformación del capitalismo actual. Como observamos, su postura al respecto es altamente pesimista, y la razón para ello es que, en su opinión, el fuerte acento actual en la emprendeduría ha transformado el régimen de dominación capitalista de represivo en seductor, lo cual lo ha dotado de una poderosa estabilidad. Nótese, sin embargo, el paralelismo de los actuales trabajadores autónomos con la situación de los pequeños artesanos que describe Thompson para la época de la Revolución industrial: inseguridad laboral, progresiva pauperización, aunque, eso sí, ahora con un relativo incremento del prestigio social.

Adicionalmente, todos estos cambios se están produciendo en una fase del capitalismo caracterizada por una inusitada concentración de la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios en un puñado de grandes corporaciones oligopolistas multinacionales que cuentan, entre muchas otras cosas que no enumeraremos aquí, con el poder fáctico de imponer sobre las poblaciones y los gobiernos occidentales de todo signo una progresiva degradación de los salarios y las legislaciones laboral y fiscal. Así, sin ir más lejos, en su participación en el ciclo *Futur(s),* en Barcelona el 27 de noviembre de 2014, el economista Antón Costas «dejó caer en el aire la siguiente paradoja: si el interés objetivo de la inmensa mayoría de la población es preservar las conquistas [sociales] y desarrollar políticas beneficiosas para el conjunto de la sociedad —por ejemplo, las de igualdad—, ¿cómo es posible que, viviendo en democracia, las decisiones que toman los gobiernos elegidos sean justamente las que perjudican a la mayoría?» (citado en Pérez Oliva, 2014).

Por otro lado, y paradójicamente, la desverticalización de los procesos de producción gracias a la generalización de la subcontratación por parte de las grandes firmas está provocando que esa inusitada concentración de intereses y ganancias empresariales en pocas manos, en lugar de concentrar también los riesgos asociados a dichos intereses en esas mismas manos, esté fomentando más

bien la diversificación de los riesgos entre miríadas de proveedores (empresas de menor dimensión, microempresas y profesionales autónomos) que pugnan entre sí por contratos que, en última instancia, están siempre condicionados a las estrategias diseñadas por las grandes corporaciones oligopolistas.

Otro punto de interés para este bosquejo de las nuevas condiciones del trabajo a comienzos de siglo XXI es el radical proceso de privatización de los sectores económicos públicos impulsado en la década de 1980 en aras de una dudosa mejora de la eficiencia. Desde las empresas energéticas o de telefonía, hasta los suministros más básicos como la electricidad o el agua, pasando por la prestación de los servicios del Estado de bienestar (sanidad, en primer lugar, pero también educación o vivienda pública), el sector económico público ha sido objeto desde entonces de un asalto concertado por el capital privado. Para los trabajadores afectados, la primera consecuencia ha sido, y está siendo, un notable deterioro de las condiciones laborales y salariales. Para el Estado-nación, uno de los efectos destacados es la pérdida de importantes mecanismos de intervención sobre la economía. Para la población en general, la supeditación del servicio público al beneficio privado está propiciando desde hace tiempo el recorte de muchos de los derechos adquiridos bajo el régimen de Estado de bienestar, sobre todo en la presente situación de elevado endeudamiento público y, en la UE, de políticas de austeridad presupuestaria promovidas por las instituciones europeas.

No podemos dejar de mencionar aquí otro de los grandes fenómenos globales contemporáneos que está afectando la estructura del trabajo en Occidente: se trata de los intensos flujos migratorios Sur-Norte. No cabe duda de que estos han sido deliberadamente utilizados por los patronos occidentales para presionar a la baja sobre los salarios de los trabajadores locales. Sin embargo, más importante aún para lo que aquí pretendemos esclarecer es su posible efecto futuro sobre el surgimiento de una nueva cohesión social. Al menos transitoriamente, la multiplicación en el seno de la tradicional clase trabajadora de las identidades culturales y nacionales presentes sin duda dificultará la aparición de una conciencia de identidad compartida y su plasmación en la correspondiente unidad de organización y acción. No olvidemos que, en el proceso de surgimiento de la clase obrera descrito por Thompson para el siglo XIX en Inglaterra, un componente destacado es la presencia de un nuevo sentimiento de identidad nacional al lado de la identidad de clase.

Por último, las consecuencias de toda esa conjunción de elementos sobre las tasas de empleo en Europa occidental no se han hecho esperar. En los países meridionales, más intensamente afectados por la crisis actual, los niveles de desempleo comienzan a ser insostenibles: en torno al 25% de la población activa, y casi el 50% de la población juvenil. En el Norte, las cifras se salvan en parte gracias a los *«minijobs»* en Alemania, a la emigración en Irlanda o, en general, al empleo temporal y precario.



Las previsiones para la ocupación en el futuro parecen aún peores. Si algunos de los pronósticos sobre la evolución de la producción industrial se acaban haciendo realidad, el desempleo masivo podría estar a la vuelta de la esquina. Entre dichos pronósticos, el economista Jock Martin, nuevamente en el ciclo *Futur(s),* estimaba que «en 2050, la productividad habrá aumentado un 300% respecto de 2010. Pero se necesitará menos fuerza de trabajo, aunque más cualificada, lo cual planteará un nuevo dilema: si no hay empleo para todos, ¿qué distribuiremos, el trabajo o la riqueza? ¿O no habrá reparto?» (citado en Pérez Oliva, 2014). Antón Costas, por su parte, especificaba en qué consistirá ese aumento de la productividad tan nefasto para el empleo: «La utilización masiva de los robots inteligentes está cambiando las actividades manufactureras e industriales. [...] Su impacto en el empleo va a ser intenso. La vieja revolución industrial del siglo XIX introdujo máquinas que aliviaron la fatiga y el sufrimiento de los trabajadores nacionales. Pero la nueva revolución de los robots inteligentes sustituirá parte de las tareas intelectuales que hasta ahora desarrollan trabajadores altamente capacitados». Nuevamente, Costas apostilla: «Como he dicho, las ganancias de productividad serán enormes. La cuestión está en cómo se distribuirán. De cómo se haga dependerá que la desigualdad social hoy existente aumente o se reduzca en los próximos años.» (Costas, 2014).

Hemos intentado subrayar algunos de los rasgos distintivos del punto de partida del proceso de cambio estructural actual que podría (o no) conducir a una nueva estructura de clases. Si nuestro diagnóstico es acertado, partimos de un colectivo de trabajadores altamente individualizado (o descohesionado) por herencia del Estado de bienestar (Beck) y por la incidencia cada vez mayor de una organización de la producción (el autoempleo) que favorece más la competencia entre individuos que su organización solidaria (Han). Además, se trata de un colectivo cuya composición es crecientemente multiétnica. Por otro lado, los cambios económicos globales que desde hace tiempo se están produciendo están provocando una visible pauperización del trabajo y una grave exacerbación de las desigualdades sociales (véanse, por ejemplo, Navarro, 2008: 76; Piketty, 2014) que, unidos al paro creciente y tal vez masivo en un futuro no lejano (Costas y Martin) y al desmantelamiento gradual de la red de protección social del Estado de bienestar, deberían impulsar a priori una nueva oleada de agravio moral capaz de guiar un proceso sostenido de lucha de consecuencias socialmente estructuradoras, similar al descrito por Thompson. ¿Está esto sucediendo realmente?



El agravio moral contemporáneo

El panorama que acabamos de exponer podría describirse también como una reedición del «cercado de los comunes» (la reprivatización de los sectores públicos) y una reimposición de la ley del mercado en todos los ámbitos de la vida, similares a los que Thompson describe para el siglo XIX en Inglaterra, pero ahora en el marco de una competencia global exacerbada. En los países del sur de Europa, el sentimiento contemporáneo de agravio moral (la «indignación») por el curso de los acontecimientos parece ser ya una realidad. En ellos, el deterioro manifiesto de las condiciones de trabajo (reformas laborales en casi todos los países de la UE) y de la remuneración de este (recordemos que en Occidente los salarios llevan décadas prácticamente estancados), así como las crecientes dificultades para, sencillamente, acceder al mundo laboral (sobre todo en el caso de las personas más jóvenes) son más acuciantes que en el resto del continente, y están provocando ya reacciones más o menos airadas de indignación popular. También los graduales recortes en los servicios del Estado de bienestar y la imposición de la gestión privada de su prestación figuran como causa prominente de las protestas en el sur europeo, muchas de las cuales reclaman explícitamente que se ponga freno a la invasión del sector público por el mercado.

Recalquémoslo pues: la situación actual en Europa no deja de guardar un cierto paralelismo con el desmantelamiento de las instituciones de protección social y el quebrantamiento de la «economía moral» popular a comienzos del siglo XIX. En paralelo también, la reacción inicial contemporánea ante las nuevas normas impuestas del juego económico ha sido de agravio moral.

Sin embargo, en gran parte de la UE, el primer síntoma de rechazo ante el cariz que está tomando la gestión política de la economía no ha sido la movilización, sino la desafección política de una proporción cada vez mayor de la ciudadanía. Con diferencias entre países europeos pero sin muchas excepciones, y ante la sensación de que las decisiones políticas son incapaces de revertir un conjunto de condiciones que supera con creces el ámbito del Estado-nación, hace ya algunos años que muchos votantes dejaron de acudir a las urnas para prestar su apoyo a los partidos políticos tradicionales.

En los países meridionales, principalmente en Grecia, España e Italia, pero también en Portugal o en Francia, el siguiente paso ha sido la movilización de la sociedad civil en un momento de particular penuria económica y drástico avance de las políticas económicas neoliberales. Cada Estado posee su propia idiosincrasia, pero el sentimiento de indignación ante la situación ha provocado amplias protestas, en ocasiones virulentas, que han generado además una gran simpatía entre las poblaciones (en España, los sondeos de opinión revelaban hasta un 80% de respaldo a las acciones de los Indignados en su momento culminante).

Más allá de la Europa del sur, el sentimiento de agravio moral también se puede percibir en el resto del continente. Aunque su manifestación diste mucho de las vistosas actuaciones de protesta del sur, qué duda cabe de que la indignación popular está transformando lentamente el mapa político del norte. Sin ir más lejos, los resultados de las pasadas elecciones al Parlamento europeo en mayo de 2014 muestran el auge de formaciones que reclaman el retorno de la soberanía económica nacional y culpabilizan a la Unión Europea de los males económicos de cada país. Con demasiada frecuencia, además, la ansiada protección de las instituciones económicas y sociales nacionales va acompañada también del rechazo a la inmigración, en una visión simplista, nostálgica y populista de las causas de la degradación económica de los trabajadores y los sectores profesionales que las naciones septentrionales están igualmente experimentando.

Así pues, en general, tanto en el norte como en el sur europeos, el sentimiento de agravio moral parece extenderse gradualmente a sectores cada vez más amplios de la población, eso sí, con velocidades distintas y con diferentes manifestaciones en cada país, las cuales podrían estar determinadas en buena medida por la gravedad tanto de la situación presente como de la situación inicial de cada Estado, en una coyuntura en la que los países del norte partían de Estados de bienestar muy robustos que, en cierta medida, aún resisten los envites de los principios económicos neoliberales. Aun así, si prosiguen las tendencias descritas en el apartado anterior, lo único que cabría esperar es que la indignación, tanto si es solo incipiente como ya manifiesta, acabe por generalizarse como estado de ánimo en Europa.

Ahora bien, ¿hacia dónde puede conducir en nuestro periodo histórico ese agravio moral que creemos cada vez más extendido en la Europa occidental? ¿Podrá acaso llegar a alumbrar una nueva división estructural de la sociedad?

La contienda social en la actualidad: ¿hacia el surgimiento de una nueva divisoria estructural?

Lo primero que uno aprecia al observar el despliegue del sentimiento contemporáneo de agravio moral es una fuerte canalización de este hacia la política electoral en toda Europa. Frente a las condiciones de forzosa clandestinidad que hemos descrito para el siglo XIX inglés y que empujaron a los desfavorecidos de la Revolución industrial hacia la radicalización y la actuación contenciosa como única forma de hacer oír su voz, la democracia representativa y el sufragio universal imperantes en el siglo XXI parecen proveer a las sociedades de medios supuestamente efectivos de transformación socioeconómica a través de la política. Así, las libertades democráticas y la política electoral pueden estar

teniendo ahora un efecto moderador sobre las posiciones iniciales de los opositores políticos radicales, que, en aquellos países en que vislumbran la oportunidad de alcanzar el poder político, están optando por moderar su discurso para incorporar a sectores más amplios de electores, como está sucediendo con el Frente Nacional (Francia), Syriza (Grecia) o Podemos (España). Es esta una diferencia crucial entre ambos periodos.

Así, si bien es cierto que en los países meridionales han tenido lugar protestas públicas multitudinarias en los últimos años, con importantes innovaciones en los repertorios de protesta y en las formas de organización, es igualmente cierto que los últimos desarrollos están llevando al aglutinamiento del descontento en torno a formaciones políticas de nuevo cuño que a lo que aspiran es a alcanzar el poder político como medio para promover el cambio y la justicia social. Syriza, en Grecia, y Podemos, en España, son casos paradigmáticos de esa entrada en la vía política de los indignados, pero también lo son los *grillini* italianos o la proliferación de candidaturas independientes en los últimos comicios municipales en Portugal. Los movimientos del sur europeo aspiran a lograr la participación en la toma de decisión política de los excluidos por el régimen actual de partidos (en España, «democracia real» es una de sus demandas), una participación que se plantea como posible solución a la desigualdad creciente y a los ataques que no cesan a los sectores profesionales y obreros. La recuperación de la soberanía económica nacional es también una de las cuestiones que estas nuevas formaciones están poniendo sobre el tapete. Otra es la sustitución de la dicotomía política izquierda-derecha por los polos élites/ciudadanía, respaldada con el meme «somos el 99%».

En la Europa septentrional, la movilización social ha sido mucho menor. Sin embargo, en Holanda (Partido por la Libertad), Austria (Partido de la Libertad), Dinamarca (Partido Popular Danés), Reino Unido (UKIP), Bélgica (Vlaams Belang), Suecia (Demócratas de Suecia) o Francia (FN), nuevos partidos nacionalistas y xenófobos no han dejado de incrementar sus resultados electorales en la última década. El fin declarado de todos esos partidos, además de la puesta en marcha de medidas para frenar la inmigración (o incluso de directa discriminación de la inmigración ya presente), es la recuperación de la soberanía nacional a la vista del retroceso del Estado de bienestar impuesto desde la Unión Europea, un cóctel que seduce a buen número de obreros, profesionales y microempresarios precarizados.

Tal es la dimensión que este tipo de formaciones está alcanzando en muchos países que el politólogo británico Ian Buruma declaraba recientemente que «la nueva división de clases se extiende menos entre los ricos y los pobres que entre élites metropolitanas y los provincianos menos sofisticados, flexibles y, en todo sentido, menos conectados» (Buruma, 2014). Su reflexión se basaba en un somero análisis de la composición social de las formaciones políticas nacionalistas xenófobas y de las distintas reacciones ante la inmigración de la población metropolitana y la población rural. En general, la divisoria que trazaba discurría entre incluidos y excluidos de la globalización económica. Por un lado, las élites financieras, las de la denominada «nueva economía» y, en general, las grandes

corporaciones y aquellas que basan su negocio en la exportación; por el otro, los trabajadores y los empresarios de los sectores industriales nacionales y muchos de los proveedores locales de todo tipo de servicios y de bienes intermedios para los sectores de éxito, cada vez más presionados por la competencia internacional. Y, a pesar de la ironía que destila el artículo de Buruma, bien podría ser ese el límite que se estuviera perfilando en Occidente entre el 99% que somos todos y el 1% restante.

Si así fuera, la propuesta de repliegue en la política del Estado-nación que en toda Europa parecen compartir una pléyade de partidos nacionalistas xenófobos en auge y algunas de las nuevas formaciones alternativas vinculadas a una agitación social previa estaría al menos identificando correctamente a las instituciones de gobernanza global (entre ellas, la UE) y los intereses que estas representan (con la ideología neoliberal a ellos asociada) como origen de las dificultades por las que atraviesan las distintas poblaciones europeas. Adicionalmente, esa nueva divisoria entre incluidos y excluidos de la globalización, implicaría que se está produciendo un ingreso de amplios sectores de las clases medias y profesionales en el rechazo a gran parte de las evoluciones económicas de los últimos decenios. (Los análisis de la composición social de ambos tipos de fenómenos así parecerían demostrarlo.)

Si en la Inglaterra del siglo XIX la conciencia de clase obrera se forjó en la lucha activa contra las políticas del Gobierno a través de la militancia en *trade unions* y *political unions* bien organizadas, de reuniones clandestinas en las tabernas, de la participación en mítines y manifestaciones, o en las acciones directas del ludismo, en la recogida de apoyos para presentar peticiones al Parlamento, en la lectura y comentario de la prensa radical… en la Europa del siglo XXI la ocupación de plazas, la discusión en las asambleas locales de los movimientos, los debates en foros sociales de internet y la respuesta a convocatorias públicas en las redes sociales virtuales han pasado a constituir los nuevos medios en los que podría forjarse ese mismo tipo de conciencia. Si esto así, las dinámicas movilizadoras del sur europeo parecen mejor dotadas para generar alguna forma novedosa de cohesión social que los partidos políticos del norte, cuya movilización gira fundamentalmente en torno al hecho de depositar una papeleta en una urna cada pocos años.

En general, las sociedades del norte de Europa no solo parecen resistir temporalmente mejor las consecuencias más drásticas de la globalización económica (por lo que los efectos de los cambios descritos más arriba no son sentidos aún en la misma medida que en las sociedades meridionales), sino que, en términos de protesta, también parecen mostrar en mayor grado las dificultades para organizarse de una sociedad fuertemente individualizada, descohesionada, como la que describía Beck.

Por otra parte, como nos avisa Wieviorka, la nostalgia de la socialdemocracia en el marco del Estado-nación que parecen compartir hoy por



hoy todas las alternativas políticas al bipartidismo tradicional que están emergiendo con fuerza tanto en el norte (nacionalismo xenófobo) como en el sur (Syriza o Podemos) difícilmente puede anunciar una(s) sociedad(es) europea(s) recohesionada(s) en torno a una nueva divisoria socialmente estructuradora. En ausencia de lucha social hombro a hombro, uno de los problemas, y no el menor, de las propuestas que miran hacia el pasado es su incapacidad para definir el lugar social de los variados colectivos de inmigrantes, algunos presentes en Europa desde hace varias generaciones. Así, la insistencia en el clivaje étnico de las alternativas políticas xenófobas del norte solo puede producir sociedades altamente problemáticas y, nuevamente, escasamente cohesionadas e internamente inestables, fácilmente marcadas por una insoportable violencia. Los estallidos periódicos de protestas anómicas (en las *banlieues* francesas o en Londres, por ejemplo) y las reacciones identitarias de las comunidades musulmanas (muy marcadas, eso sí, por el panorama geopolítico internacional) son prueba de la inviabilidad futura de las propuestas nacionalistas basadas en la xenofobia.

Por lo que respecta a los movimientos sociales de base amplia del sur, si bien su carácter es a priori integrador, su divisoria de excluidos/incluidos del sistema político nacional y el sistema económico global tampoco parece hallar el eco deseado entre las comunidades inmigrantes nacionales. Aunque solo sea por eso, y a falta aún de un proceso de lucha social comparable al descrito por Thompson, parece difícil vislumbrar el momento futuro en que se cumplan las esperanzas de Wieviorka de que este tipo de lucha social acabe por alumbrar el surgimiento de la conciencia de unidad de intereses entre todos los excluidos y, así, sea capaz de generar «nuevas concepciones del vivir juntos y nuevas solidaridades activas».

Y es que el problema principal de las diferentes respuestas de las sociedades europeas y occidentales a la imposición de las reglas de juego de los intereses económicos de las firmas financieras y comerciales globales es la carencia de una visión alternativa y común de la sociedad; no una visión forjada en abstracto, sino el fruto de un compromiso ideológico surgido de la movilización compartida y sostenida de los distintos sectores sociales afectados por unas reglas comerciales que ahora son globales y difícilmente soslayables mediante iniciativas nacionales o nacionalistas.

Los ingredientes de una visión alternativa de la sociedad

No es fácil entrever hoy en día cuáles podrían ser los ingredientes ideológicos de una nueva visión de la sociedad capaz de, simultáneamente, aglutinar las distintas

sensibilidades ya presentes en las luchas sociales y concitar un respaldo amplio de ese «99%» de excluidos, hasta prefigurar una nueva oposición de clases sociales.

Si deseamos ir más allá del marcado ingrediente redistributivo socialdemócrata o del elemento renacionalizador (ambos teñidos de nostalgia de un pasado cercano) de las grandes alternativas en auge que repasábamos más arriba, tal vez deberíamos enfocar la atención en los variados discursos que componen el microtejido de los movimientos sociales más amplios que han logrado captar la atención del público en los países del sur europeo y que, más allá de las diferentes vías que ha adoptado la expresión más general de la indignación, también están ciertamente presentes en el norte.

Como no podría ser de otro modo, algunos de los elementos ideológicos más claramente renovadores que participan en las luchas actuales son los herederos de anteriores luchas fallidas, que continúan a la espera de una oportunidad para devenir, ahora sí, una alternativa real en Occidente. No podría ser de otro modo si creemos en una dinámica fluida de evolución social como la acertadamente descrita por Thompson.

De entrada, vemos cómo las distintas corrientes históricas del marxismo o el anarquismo continúan imbricadas en las luchas sociales contemporáneas, igual que lo están las reivindicaciones feministas o el ecologismo anticapitalista, ambos bien desarrollados en las últimas décadas del siglo pasado y, el segundo, fuertemente reforzado por la amenaza más reciente de cambio climático global. Junto a estos convive un revigorizado movimiento cooperativista, más pragmático, así como los defensores de una economía de proximidad (en la agricultura y la suficiencia alimentaria, por ejemplo, pero no únicamente). Además, en algunas regiones de Europa (Escocia, Cataluña, Bélgica o Euskadi), se propone un nacionalismo emancipador e integrador (de carácter progresista y no xenófobo) como primer paso para renegociar una integración diferente en el sistema capitalista global.

En toda esta diversidad de idearios políticos y económicos, el mayor consenso parece hallarse en la necesidad de poner freno a las actuales dinámicas, internas y externas, de acumulación de capital e incremento de las desigualdades, tanto nacionales como globales, y sustituirlas por políticas racionales centradas en las personas comunes y en la satisfacción de sus necesidades (entre las cuales se incluye la necesidad fundamental de supervivencia de la especie a través del respeto del medio en que habitamos). La profusión en el cambio de siglo de movimientos sociales locales y nacionales de múltiples tipos con capacidad para organizarse en distintas formas también en el plano transnacional (europeo, pero también global; véase Tarrow, 2005) ha llevado a algunos a imaginar una gobernanza global marcada por la presión democrática desde abajo de una sociedad civil robustamente organizada y movilizada (véase la discusión al respecto en Keane, 2003).

Sin embargo, por encima de todo ello, lo que hoy resulta manifiesto es la dificultad de las sociedades civiles para organizarse efectivamente (más allá de acciones puntuales) bajo uno u otro ideario y atraer al grueso de las ciudadanías en cualquier plano superior al local o el nacional, como es el europeo. Y, en ausencia de la ritualidad de las actuaciones colectivas capaz de generar lazos firmes de solidaridad en torno a ideas compartidas, en ausencia de la negociación de posturas e intereses que hace posible la actuación coordinada, en ausencia de una lucha decidida de carácter paneuropeo (y más allá) para transformar el rumbo del cambio global, resulta también manifiesta la escasa probabilidad de generar de momento un discurso poderoso que represente una alternativa seductora al neoliberalismo que hoy impera.

3. Conclusión

Hemos intentado establecer algunas coincidencias y discrepancias entre el proceso de transformación social que tuvo lugar a lo largo de la primera mitad del siglo XIX en paralelo al despliegue de la Revolución industrial y el momento contemporáneo. Por la parte del proceso de surgimiento de la clase obrera inglesa, hemos insistido en el agravio moral que en su momento provocaron el desmantelamiento de las instituciones de protección social del Antiguo Régimen y el ascenso de una nueva élite industrial cuya riqueza provenía manifiestamente de la degeneración de las condiciones de vida y de trabajo de los agricultores y pequeños productores artesanos. Ese agravio moral fue uno de los motores primordiales de un proceso de enconada oposición social en el que las organizaciones, las movilizaciones y las reivindicaciones, inicialmente dispersas, fueron convergiendo gradualmente hasta hacer realidad un nuevo actor social unitario y consciente de su identidad: la clase obrera inglesa. Simultáneamente, las luchas compartidas dieron pie igualmente a una ideología política compartida, fruto de la reunión de una diversidad de ingredientes disgregados presentes a lo largo de las diferentes fases de la movilización.

Por lo que respecta al momento contemporáneo, hemos intentado identificar un conjunto de transformaciones en el plano de la producción y el trabajo que, aun partiendo de unas sociedades occidentales fuertemente individualizadas y altamente descohesionadas, han generado ya un agravio moral cada vez más extendido en Europa, con manifestaciones, sin embargo, específicamente distintas en el sur y el norte del continente. Tras preguntarnos si dicho agravio moral podría desencadenar un proceso similar de emergencia de una nueva divisoria socialmente estructuradora, hemos constatado que, a pesar de la intensa movilización acaecida en el sur europeo y su composición socialmente novedosa, en el momento actual asistimos aún al primado en Europa de la vía de la

contienda política y electoral como principal enclave de cambio de las sociedades, en una dirección que se nos antoja más nostálgica que transgresora. Al contrario de lo que sucedió en el siglo XIX inglés, donde la clandestinidad de la lucha social condujo a la radicalización de las posturas, esa canalización de la indignación social hacia el terreno parlamentario ha representado hoy en día la relativa marginación de las posturas más radicales y el ascenso de la moderación como medio para la construcción de mayorías parlamentarias amplias (valgan como ejemplo la evolución del tono discursivo del FN en Francia, de Syriza en Grecia o del propio Podemos en España). Así pues, actualmente y en el ámbito europeo, la recuperación de la soberanía nacional y la reimplantación de algunas medidas redistributivas se han erigido en las principales recetas para revertir la mengua de condiciones de vida de amplios sectores de las sociedades, que ya no se reducen a la clase obrera tradicional.

Sin embargo, en el contexto presente de elevada y siempre creciente integración del sistema-mundo occidental, donde las decisiones económicas antiguamente reservadas a los sistemas parlamentarios del Estado-nación se han trasladado a instituciones de gobernanza económica ajenas a todo control democrático, lo más plausible es pensar que la renacionalización de la economía y una tímida restitución de algunos de los servicios del bienestar resulten totalmente inefectivas a la hora de calmar el agravio moral que gradualmente se va extendiendo.

Así pues, si estamos en lo cierto, los ingredientes de un discurso, aún lejano, que sea socialmente transformador y estructurador solo cabe buscarlos, hoy igual que antes, en las distintas posiciones que participan en la organización y la movilización de las actuales sociedades civiles occidentales. Al igual que en la Inglaterra del siglo XIX uno de los factores cruciales para la formación de la clase social obrera fue el hecho de alcanzar la unión organizativa, movilizadora y discursiva en el plano nacional, en el periodo actual, solo la confluencia organizativa, movilizadora y discursiva de todas esas posiciones en un ámbito supranacional poseerá el potencial necesario para alumbrar el nacimiento de una nueva división estructuradora de la sociedad.



4. Referencias

BECK, ULRICH (1998). *La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad,* Paidós, Barcelona.

BURUMA, IAN (2014), «Inmigración y división de clases», en *La Vanguardia,* 15 de diciembre, sección «Opinión».

BOLTANSKI, LUC, Y EVE CHIAPELLO (2005). *The New Spirit of Capitalism,* Verso, Londres.

COSTAS, ANTÓN (2014), «Divorcio entre economía y política», en *La Vanguardia,* 3 de diciembre, sección Opinión.

HAN, BYUNG-CHUL (2014), «¿Por qué hoy no es posible la revolución?», en *El País,* 3 de octubre, p. 33.

KEANE, JOHN (2003), *La sociedad civil global y el gobierno del mundo,* Editorial Hacer, Barcelona.

MCADAM, DOUG; SIDNEY TARROW, Y CHARLES TILLY (2005). *Dinámica de la contienda política,* Editorial Hacer, Barcelona.

MENGER, PIERRE-MICHEL (1999), «Artistic Labor Markets and Careers», en *Annual Review of Sociology,* vol. 25, agosto de 1999, pp. 541-574.

NAVARRO, VICENÇ (2008), «La lucha de clases a escala mundial», en *Monthly Review. Selecciones en castellano,* nº 8, pp. 71-88.

PÉREZ OLIVA, MILAGROS (2014), «Incertidumbres», en *El País,* 14 de diciembre, sección «Cataluña», p. 2.

PIKETTY, THOMAS (2014), *El capital en el siglo XXI,* Fondo de Cultura Económica, Madrid.

TARROW, SIDNEY (2005), *El nuevo activismo transnacional*, Editorial Hacer, Barcelona.

THOMPSON, E. P. (1971). «The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century», en *Past and Present,* nº 50, febrero de 1971, pp. 76-136.

THOMPSON, E. P. (2012). *La formación de la clase obrera en Inglaterra,* Capitán Swing, Madrid.

WIEVIORKA, M. (2014). «¿Cómo revigorizar el vínculo social?», en *La Vanguardia,* 3 de noviembre, p. 17.

